



# POLÍTICA Y EXPERTICIA EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

## *Editoras*

**Natacha Bacolla**  
**Jimena Caravaca**  
**Claudia Daniel**  
**Virginia Mellado**  
**Karina Ramacciotti**

## **Contacto:**

[estudiossocialesdeleestado@gmail.com](mailto:estudiossocialesdeleestado@gmail.com)

En marzo del 2020, a partir de la declaración de la pandemia de Coronavirus por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la agenda política y social de la Argentina sufrió un giro rotundo e inesperado. De manera similar en la gran cantidad de países afectados por la pandemia, pero con algunos matices locales, se implementaron medidas de aislamiento social, recomendaciones de higiene, cierre de fronteras terrestres y aéreas, internacionales e incluso interprovinciales.

La pandemia de Coronavirus arribó a una Argentina golpeada por años de recesión económica, crisis de deuda externa, altos niveles de inflación y de informalidad laboral e incremento de la pobreza. El cambio reciente de gobierno brindaba, por un lado, cierta fortaleza a la autoridad política para enfrentar la crisis sanitaria, al tiempo que renovaba las capacidades políticas de conducción de las medidas a implementar para controlar la propagación de la enfermedad. Pero, por otro lado, la llegada de la COVID-19 se producía también con el telón de fondo de un sistema científico desfinanciado en los últimos años, que había sido relegado a un segundo plano por las propias decisiones del presidente Mauricio Macri, entre las que estuvo la devaluación del ministerio de Ciencia y Tecnología al rango de secretaría. Medidas como estas fueron escoltadas, durante el gobierno de Cambiemos, por una campaña de desprestigio del discurs-

so científico y sus representantes, acompañada del silencio o el apoyo intermitente de los grandes medios de comunicación. Desde el comienzo de su gestión, y para diferenciarse de su antecesor en el cargo, el presidente Alberto Fernández reivindicó discursivamente a la ciencia y la tecnología como “pilares fundamentales” de su gobierno.

Al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, apenas unas semanas antes de que la pandemia de coronavirus se convirtiera en un tema nacional, el presidente declaró ante la Asamblea legislativa “Somos un gobierno de científicos”. Aunque la metáfora de aires positivistas puede resultar en más de un sentido exagerada, es cierto que, en la composición del nuevo elenco de gobierno, los especialistas y expertos reemplazaron a los CEOs. Es posible leer en esta decisión una revalorización de la formación y la tarea científica que convirtió en elegibles para el gabinete a miembros de equipos académicos. La condición de clase, el capital social o el paso por instituciones educativas de elite, no resultaron determinantes como en el gabinete anterior. Asimismo, frente a la concepción otrora predominante de que la ciencia debía esperar porque durante una situación de crisis económica como la que atravesaba el país había que atender otras emergencias sociales, la nueva gestión política invirtió los términos de la supuesta aporía al plantear públicamente la convicción de que sin la ciencia nacional volcada a, y orientando el desarrollo, no existe solución posible a los problemas económicos y sociales de la Argentina.

El cambio de concepción se vio encarnado en medidas políticas concretas como la ampliación de los ingresos a la carrera de investigador científico, el aumento del estipendio de las becas y la recomposición de los fondos de los proyectos para garantizar la continuidad de las investigaciones. Entre otras consecuencias, este giro tuvo el efecto de tender puentes entre buena parte de la comunidad científica y las estructuras políticas, gestándose otra plataforma para la vinculación con el poder político, que se mostró muy necesaria en un momento en que el desafío era mayúsculo y se requería de sus aportes para enfrentar al virus. Independientemente de su identificación política o no, las y los investigadores científicos respondieron al llamado del Poder Ejecutivo ante la crisis sanitaria con la generación de test diagnósticos, producción de respiradores, protecciones para el personal sanitario, estudios sobre el impacto social de la cuarentena, equipamiento médico de alta complejidad, ensayos en tratamientos (de plasma convaleciente) y vacunas para la COVID-19.

Además de esta nueva escucha hacia el campo científico, en general, los saberes provenientes de los expertos de la medicina fueron colocados en un sitio de privilegio a la hora de asesorar al presidente. Sin duda, Alberto Fernández dejó clara su hoja de ruta ante esta crisis al sostener “De la economía se vuelve, de la muerte no se vuelve más”. De manera temprana, en comparación con otros jefes de Estado, implementó el aislamiento social preventivo y obligatorio sugerido por los expertos, con el objetivo de espaciar los contagios y así poder ganar tiempo para equipar y rearmar un sistema de salud que, dada la desinversión crónica y los recortes económicos que sufrió como objeto de políticas de corte neoliberal, se encontraba con falta de insumos y equipamientos. Esto supuso correr la cuestión económica del centro de la escena, o asumir los costos negativos que el aislamiento tendría sobre la actividad económica, aun pese a los condicionamientos recibidos desde ciertos sectores económicos respecto de la importancia de mantener “viva” la economía.

A los pocos días de detectarse los primeros casos de la COVID-19 en la Argentina se creó además una “Comisión de Expertos” conformada por siete destacados infectólogos e infectólogas, epidemiólogas y epidemiólogos. Por su composición, quedaba en claro que los saberes médicos tenían un protagonismo central, tanto al interior del gobierno, para la gestión de la crisis, como de cara a la sociedad, ya que son también quienes presentan los informes diarios sobre la pandemia; son, ya, caras reconocibles para el público. Aunque la pandemia tiene varias aristas, dada su naturaleza multidimensional, los médicos desplazaron a los economistas no sólo en la mesa chica de la toma de decisiones, sino en la esfera pública: pasaron a ser los más consultados en los programas del horario central de la televisión, brindan diariamente consejos prácticos sobre cómo prevenir la enfermedad. Es decir, casi en el rol de intelectuales públicos, esos profesionales de la salud son, hoy en día, los constructores activos de la conciencia pública acerca de la pandemia.

En cuanto a la intervención del experto de la salud en la toma de decisiones, debemos subrayar que la presencia de argumentaciones técnicas con el fin de diseñar políticas sanitarias no es una novedad en la historia argentina. En otras oportunidades los médicos, como profesionales muy ligados a la constitución del Estado moderno, han estado presentes para asesorar, guiar y legitimar acciones políticas. A fines del siglo XIX los denominados higienistas fueron quienes tuvieron un rol destacado en la redacción, im-

plementación y control de las políticas que pretendían limitar el impacto de la desigualdad social que traía la modernización económica. Así pues, los brotes epidémicos de fiebre amarilla de 1858 y 1871 hicieron que el tema higiénico se convirtiera en una preocupación pública tanto en el plano académico como en la función pública. Los médicos higienistas tendieron a argumentar a favor de una expansión de las facultades del Estado en materia de salud pública e impulsaron la creación y mantenimiento de una gran cantidad de instituciones para el cuidado y atención de la salud, y de organismos públicos como el Departamento Nacional de Higiene (1880). Los grandes temas de la higiene pasaron por eliminar los focos de infección por medio de inspecciones domiciliarias y ciertas medidas de prevención tales como la recomendación de aislamiento, cuarentena y obras de salubridad pública. El higienismo se convirtió en una de las grillas interpretativas con la que se abordaron problemas urbanos, no solo acerca de la salud física, sino también acerca de cómo intervenir sobre la vida privada de los individuos. Se hizo hincapié en las costumbres, ya que se dieron prescripciones y consejos sobre cómo los individuos debían bañarse y comportarse en público –por ejemplo, no fumar en espacios públicos, no escupir, no tomar mate–, o sobre cuál era el largo “adecuado” para las polleras de las mujeres.

Durante el peronismo clásico (1946–1955), contamos con varios ejemplos en torno a cómo los profesionales se volcaron al diseño e implementación de las políticas sanitarias. Tomemos dos ejemplos; uno de ellos es el de Carlos Alvarado, un profesional con vasta experiencia en el área del paludismo, quien estuvo a cargo de la elaboración de los lineamientos técnicos para erradicar el flagelo. A los pocos meses de diseñar su plan basado en “policía de focos” sugirió un drástico cambio; usar el DDT, un insecticida utilizado en el control de la malaria, la fiebre amarilla, la fiebre tifoidea y muchas otras infecciones. Alvarado logró el apoyo político necesario del por entonces secretario de salud Ramón Carrillo, se fumigaron extensas regiones del país y se redujo los índices de expansión de la enfermedad. En 1949 el paludismo se encontraba erradicado de la Argentina. No obstante, las políticas no se continuaron, la dependencia se cerró y la enfermedad al poco tiempo regresó.

Otro ejemplo constituye lo sucedido con las políticas alimentarias. A partir de 1949, cuando la secretaría de Salud Pública se convirtió en ministerio de Salud Pública, se diseñaron políticas de estímulo para lograr una

alimentación más variada que incluyera más frutas, pescado y vegetales. Se instituyeron recomendaciones diarias de menús, se estimularon las llamadas “huertas de Salud” y diversas estrategias de divulgación. No obstante, estas acciones encontraron un límite en las posibilidades económicas de los habitantes de comprar los alimentos considerados más nutritivos, pero más caros para su adquisición. Entonces, los conocimientos y herramientas planteadas desde un determinado saber científico, en este caso la Nutrición, no pudieron ser implementados dadas las condiciones de vida de las mayorías en nuestro país.

Durante la segunda mitad del siglo XX, el lugar que tuvo la medicina en el diseño de las políticas públicas fue declinando, en parte desplazada por otros saberes profesionales. Aquello que la literatura bautizó como el irresistible ascenso de los economistas, evidenciado no solo en la Argentina sino en varios países de América Latina, tuvo que ver con la creciente centralidad que fue adquiriendo la disciplina económica y el papel cada vez más relevante de sus profesionales en los equipos técnicos del Estado. Con las reformas estructurales de los años 1990 los economistas se encumbraron en los espacios clave de decisión política. Estos especialistas se establecieron como las voces autorizadas para definir los objetivos y diseñar las políticas públicas aún en áreas que a priori no parecerían naturalmente de su competencia, como la educación. Servicios sociales como la salud comenzaron a ser considerados y evaluados en virtud de una racionalidad costo-beneficio que se hacía cada vez más hegemónica y la mejora de la eficiencia y eficacia del sistema se convirtió en criterio prioritario de la administración de la salud pública. Los saberes médicos –fuera por su especialización o por su mayor tecnicismo– se fueron alejando del lugar central que habían tenido en la construcción de las políticas sociales. Otros léxicos se volvieron el idioma común para explicar situaciones y guiar políticas aún por fuera de su ámbito más directo de incumbencia.

Relatos como este, representativos de las relaciones entabladas entre saberes procedentes de comunidades científicas y la política, nos estimulan a reflexionar sobre cómo la administración estatal desde el siglo XIX ha reclutado a “técnicos” muchas veces por considerarlos alejados de los intereses políticos, lo que, según se cree, incrementaría el grado de autonomía de las decisiones administrativas. No obstante, merece reconocerse también que la articulación de la argumentación política o técnica,

según el momento, puede constituir una estrategia de legitimación del accionar de los profesionales en su paso por la administración pública.

Desde la designación de la mencionada “Comisión de Expertos”, sus integrantes forman parte de una trama amplia de acciones tendientes a diagnosticar y reformular las fases de la administración de la cuarentena. Mantener un nivel de contagios que el sistema de salud pueda hacer frente significaría (además de salvar vidas) una gestión “exitosa” de una pandemia con consecuencias muy dolorosas en varios países (al punto tal de llegar allí a erosionar al extremo la autoridad política central) y, al mismo tiempo, aumentar el apoyo y la legitimidad del gobierno. Si bien es auspicioso que el discurso político y su accionar se referencie en la producción científica y que las argumentaciones racionales sean el medio escogido para la construcción de la política, no debe por ello abandonarse la evaluación crítica en torno a la diversidad de usos públicos a los que las argumentaciones científicas quedan sujetas. Más allá del bienestar que pueda generar para la sociedad, como todo discurso, el discurso científico también es enunciado desde una posición y una situación.

Dado el carácter global de la pandemia, los dilemas que presenta la articulación entre argumentación política y técnica no se circunscriben sólo a los Estados nacionales. Como otras coyunturas críticas de muy distinta naturaleza –crisis económicas, políticas y guerras mundiales– la expansión planetaria del coronavirus ha puesto en movimiento un proceso de transformación no sólo de las capacidades estatales de intervención sino la de los organismos internacionales. Una muestra contundente de ello es la disputa entre la OMS y Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, por el modo en que este último ha gestionado la pandemia –que ha derivado a su vez en una reevaluación del propio sistema de salud norteamericano–. A nivel global, las tensiones desatadas entre los organismos técnicos y las decisiones de política nacional abren un escenario que no es sólo complejo para la articulación entre argumentación técnica y política; sino que plantea un momento confuso, potencialmente fecundo, para volver a pensar los goznes entre nación/globalización, pero también entre Estado y democracia, o mejor aún, entre política y bien común.